

Esfuerzo personal y papel del Estado

El anhelo de equidad es un imperativo ético que permea a toda la sociedad, pero que se debe complementar con una fuerte dosis de esfuerzo de las personas.

IGNACIO IRARRÁZAVAL

Director de Asuntos Públicos UC

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional Bicentenario UC-Adimark, dos de cada tres chilenos se inclinan por la afirmación "cada persona debería preocuparse y responsabilizarse por su propio bienestar", mientras que en el otro extremo sólo un tercio de la opinión pública estima que es papel del Estado proveer el bienestar a las personas. Aunque esta información muestra diferencias según nivel socioeconómico, ya que los sectores más acomodados privilegian la opción personal respecto de los menos acomodados, no puede desconocerse que, incluso en los sectores más pobres, el 58 por ciento está de acuerdo con la afirmación mencionada. Esta actitud se refuerza con un reconocimiento por parte de todos los estratos socioeconómicos respecto de las bondades de una retribución conforme al mérito en el trabajo. En efecto, el 68% de los encuestados opina que las personas que hacen bien su trabajo, en la misma función, deberían ganar más que las otras. Otra cifra que confirma esta sintonía es que el 61 por ciento de la población afirma que el trabajo "duro" es la mejor garantía para tener éxito en la vida.

Sin embargo, esta actitud generalizada respecto del logro del bienestar personal se complementa también con un fuerte

anhelo de igualdad social y mayor equidad para el país, opinión que tiene una alta frecuencia en todo el espectro socioeconómico. Lo interesante entonces de la Encuesta Bicentenario es que permite identificar que una amplia proporción de quienes privilegian el esfuerzo individual para el logro del bienestar son los mismos que, a su vez, desean una mayor equidad para la nación. De esta forma, el anhelo de equidad es un imperativo ético que permea a toda la sociedad, pero que se debe complementar con una fuerte dosis de esfuerzo de las personas. Este imperativo ético no se contrapone con la valoración del logro individual.

El estudio también nos muestra un considerable nivel de optimismo en la ciudadanía respecto de progresar en diversas metas socioeconómicas. Más de la mitad de la población cree que de aquí al Bicentenario se habrá avanzado en aspectos tales como "ser un país desarrollado", "garantizar la atención de salud para la población" e incluso "resolver el problema de la calidad de la educación". Sin embargo, en el caso de "eliminar la pobreza" y "ofrecer igualdad de oportunidades", las frecuencias observadas son más bajas; es decir, en estos ámbitos no se observa ese grado de optimismo por parte de la ciudadanía. Nos debería preocupar que justamente dos elementos claves de cualquier política social sean mirados con mayor reserva y cautela por parte de los chilenos.

Estos antecedentes son muy relevantes para reflexionar respecto de qué esperamos del Estado en relación con la provisión del bienestar social en nuestro país. En pocas palabras, los datos analizados hacen plausible un modelo de igualdad de oportunidades, en el cual las personas se responsabilizan de su propio bienestar a partir de condiciones básicas de equidad que se logran con la intervención del Estado, la sociedad civil y otros actores. Tres ideas iniciales en este sentido. En primer lugar, el Estado debe financiar o proveer ciertos bienes públicos que son básicos para tener un nivel de equidad social; por ejemplo, educación y salud. En segundo lugar, tal como se recoge en la encuesta, se requiere de una política social que reconozca y potencie el esfuerzo que día a día realizan muchas personas para lograr un mayor bienestar de sus familias. En otras palabras, el papel del Estado es crear, por una parte, oportunidades que generen efectivamente procesos de incentivos y movilidad social y, por otra, los ciudadanos tenemos el "deber" de aprovecharlas.

Finalmente, más allá de garantizar derechos universales de carácter permanente, los cuales muchas veces ni siquiera se pueden exigir, se requiere de un sistema de protección a los riesgos de vulnerabilidad que son propios de economías abiertas como la chilena y de las familias que transitan en torno a la pobreza.